

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía la firma auténtica y, para evitar el acceso a datos personales protegidos, se ha ocultado el código que permitiría comprobar el original

Recurso nº 424/2025

MMCC 117/2025

NOTIFICACIÓN

Le notifico que, con fecha 2 de octubre de 2025 el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid ha dictado el siguiente Acuerdo:

Resolución de 2 de octubre de 2025, del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, por la que se acuerda la adopción de medidas cautelares de suspensión por la exclusión en el contrato "Organización, Gestión, Impartición y Evaluación de Cursos de Formación Profesional en el Centro TIC de Alcobendas asociado al Centro de Formación Profesional en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CRN Getafe)", Expte C-241A/002-25 (A/SER-001183/2025) licitado por el órgano de contratación *Consejería de Economía, Hacienda y Empleo División de la Junta Central de Compras 05AR452*

Con fecha 26 de septiembre de 2025 se ha recibido en este Tribunal escrito, de fecha 25 de septiembre, de la representación legal de la "UTE IDEL-DIGNITAE" integrada por las empresas INNOVACIÓN Y DESARROLLO LOCAL, S.L. y DIGNITAE FORMACIÓN, S.A.U. interponiendo recurso especial en materia de contratación contra la exclusión de su oferta presentada en la licitación.

La recurrente en el escrito de interposición del recurso, solicita que se acuerde la medida cautelar de suspensión del procedimiento de contratación hasta la resolución del recurso dado que continuar con el procedimiento produciría una situación que privaría de efecto útil del presente recurso y haría inservible una eventual resolución estimatoria del mismo.

Con fecha 26 de septiembre de 2025, se ha remitido al OC el requerimiento de la documentación y preceptivo informe establecido en el artículo 56.2 de la Ley de Contratos del Sector Público. Transcurrido el plazo otorgado no se ha remitido la

documentación requerida por lo que corresponde a este Tribunal pronunciarse sobre la medida cautelar solicitada.

El artículo 51.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transpone al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP) establece que en el escrito de interposición se hará constar el acto recurrido, el motivo que fundamenta el recurso, los medios de prueba de que pretende valerse el recurrente y en su caso las medidas de naturaleza cautelar cuya adopción solicite.

Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la adopción de la medida cautelar exige que el recurso pueda perder su finalidad legítima, lo que significa que, de ejecutarse el acto, se crearían situaciones jurídicas irreversibles haciendo ineficaz la sentencia (en este caso resolución) que se dicte, e imposibilitando el cumplimiento de la misma en sus propios términos, con merma del principio de identidad. Aun concurriendo el anterior presupuesto, puede denegarse la medida cautelar siempre que se aprecie perturbación grave de los intereses generales o de tercero, lo que obliga a efectuar siempre a un juicio comparativo de todos los intereses en juego, concediendo especial relevancia, a la hora de decidir, a la mayor perturbación que la medida cause al interés general o al de un tercero afectado por la eficacia del acto impugnado; y, en todo caso, el juicio de ponderación que al efecto ha de realizar el órgano jurisdiccional debe atender a las circunstancias particulares de cada situación, y exige motivación acorde con el proceso lógico efectuado para justificar la adopción o no de la medida cautelar solicitada.

Por otro lado, el recurso especial en materia de contratación tiene como finalidad obtener una resolución rápida y eficaz, de manera que una decisión ilegal no se pueda consolidar por la perfección del contrato.

Dado el momento procesal en el que se encuentra el expediente de licitación y que

se podría llegar a la adjudicación, este Tribunal considera conveniente adoptar la medida cautelar de suspensión del procedimiento de licitación.

Así con la suspensión de la tramitación del expediente de contratación en este supuesto se trata de evitar la posibilidad de causar perjuicios a los interesados afectados.

De acuerdo con lo anterior, ponderadas las circunstancias del caso y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.3 de la LCSP, este Tribunal por unanimidad,

ACUERDA

Suspender la tramitación del procedimiento de adjudicación del contrato denominado *"Organización, Gestión, Impartición y Evaluación de Cursos de Formación Profesional en el Centro TIC de Alcobendas asociado al Centro de Formación Profesional en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CRN Getafe)"*, Expte C-241A/002-25 (A/SER-001183/2025) licitado por el órgano de contratación *Consejería de Economía, Hacienda y Empleo División de la Junta Central de Compras 05AR452*, hasta que se resuelva el recurso y se acuerde expresamente el levantamiento de la suspensión.

Contra el presente Acuerdo no cabrá recurso alguno, sin perjuicio de los que procedan contra la resolución que se dicte en el procedimiento principal.

EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL

Firmado digitalmente por: DIAZ BENITO PEDRO
Fecha: 2025.10.03 07:44